

POLITICAS PÚBLICAS EN PRIMERA INFANCIA, EXPERIENCIAS EN LA ARTICULACIÓN DE SECTORES, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Autor. Lic. Javier Quesada

Consultor OEI, Argentina y Paraguay.

Breve síntesis.

La Primera Infancia, a nivel regional ha sido proclamada como prioridad de la política pública de la gran mayoría de los países, sin embargo los modelos de abordaje y las prácticas cotidianas dan cuenta de por lo menos, tres problemas que revisten cierta gravedad:

- a) La concepción de niño y niña que subyace a los servicios y programas existentes, proclama a la infancia desde la perspectiva de la CDN pero en la ejecución concreta, sigue percibiéndose al niño y la niña como sujeto tutelado; objeto de intervención estatal y sujeto de compasión del adulto, por sobre su estatus de derecho. Lo escrito y proclamado no logra en su totalidad, incorporarse a modo de cambio actitudinal y atención particular a la primera infancia.
- b) Los abordajes fragmentados atentan constantemente contra la integralidad del niño, el sistema educativo lo atiende en cuanto alumno, el sanitario en cuanto enfermo, las áreas de infancia en términos de derechos vulnerados, los ministerios de economía o hacienda como un gasto social. La articulación imprescindible para comprender la totalidad de la infancia y la integralidad del niño está demorada entre discusiones de competencias de cada sector, de cada profesional, reflejada en presupuestos repartidos en diversas áreas gubernamentales y en tensión con organizaciones de la sociedad civil que demandan al estado financiamiento para ocuparse de las problemáticas que el propio Estado no logra atender.
- c) La adecuación de marcos normativos es muy interesante, todos nuestros países han adherido a la CDN y han modificado normativas internas para responder a sus principios básicos. Se han elaborado planes generales de acción destinados a la infancia en general y en particular de promoción y desarrollo integral de la primera

infancia. Varios de estos programas han sufrido recortes presupuestarios, migración de equipos técnicos cualificados y especialistas en la temática o directamente han desaparecido de la oferta de política pública con los cambios de gestión gubernamental, volviéndolos a políticas de gestión y no políticas de Estado.

Frente a este escenario es imperioso poner foco en los modelos de gestión de la política pública de primera infancia, dar una batalla decisiva respecto del paradigma “ejecutado” y no el “proclamado” en los documentos, desde abordajes interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinarios, como único modo de ejercer una política de primera infancia integral y promotora de derechos.

En los colectivos sociales de mayor vulnerabilidad social, este problema se agrava, dado que las familias no están en condiciones de demandar servicios de calidad, conformándose con haber accedido a ello, perciben que no están excluidos de los mismos, aunque estos servicios no promuevan un auténtico bienestar. Un conjunto de decisiones políticas destinadas a promover programas de renta directa a las familias y los niños y las niñas, ha comenzado a desandar el histórico camino de la desigualdad social, permitiendo que las familias accedan con mayor facilidad a los servicios educativos, sanitarios y de protección social. Por medio de estas acciones estructurales se va modificando el mapa de la infancia en la región y constituyéndose en ciudadanos y no sólo habitantes de nuestros países.

El gasto social en infancia, según diversos estudios que reflejan los datos de la región, no han logrado estar “blindados” un % porcentaje específico del PIB, de modo de garantizar que los avatares de las economías regionales, no recaigan como tradicionalmente, en recortes del área social y en particular de la primera infancia, tras la concepción de que es una colectivo social sostenido por el ámbito familiar y no institucional.